

2027 ya comenzó: Morena ordena filas, PAN redefine alianzas y los sindicatos elevan la presión

El Segundo Informe de Gobierno abre una nueva etapa política: Morena acelera la selección de candidaturas y enfrenta el costo del caso Enrique Inzunza; el PAN flexibiliza sus alianzas y los partidos aliados de la 4T ganan margen de negociación. Al mismo tiempo, un paro magisterial en Morelos y nuevas tensiones laborales recuerdan que la estabilidad política también dependerá de atender las demandas de los trabajadores.

La elección de 2027 todavía está lejos en el calendario, pero en los partidos ya comenzó. Morena aprobó la convocatoria para las diputaciones federales, reorganizó posiciones en el Congreso y busca mantener unidos al PT y al Partido Verde. El mensaje desde Gobernación ha sido claro: las aspiraciones individuales no deben ponerse por encima del proyecto político.

Esa estrategia enfrenta su primera prueba con Enrique Inzunza. El senador sinaloense regresó a la Cámara alta después de cuatro meses de ausencia, se declaró inocente de los señalamientos estadounidenses sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y exigió a la FGR concluir su investigación. Aunque dejó la bancada de Morena, anunció que seguirá apoyando a la Cuarta Transformación. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano consideran insuficiente esa separación y reclaman que deje temporalmente el cargo mientras se esclarece el caso.

El episodio ocurre justo cuando Morena necesita demostrar que los filtros anunciados para 2027 se aplicarán de manera efectiva. La prioridad política será evitar que los conflictos personales o investigaciones abiertas terminen contaminando la selección de candidatos. Al mismo tiempo, la llegada de Higinio Martínez a la Presidencia del Senado y de Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, a la Cámara de Diputados refleja la necesidad de preservar equilibrios dentro de la coalición gobernante.

La oposición también está moviendo sus piezas. Jorge Romero anunció que el PAN no impondrá una fórmula nacional de alianzas y que cada estado será analizado por separado. La estrategia pretende adaptarse a condiciones locales muy diferentes, pero la renuncia de Adriana Dávila a un órgano de dirección panista exhibe

inconformidad con la manera en que se han definido candidaturas y acuerdos internos.

Mientras los partidos miran hacia las urnas, el sector laboral recuerda que existen conflictos más inmediatos. En Morelos, alrededor de 800 maestros de la Sección 19 del SNTE iniciaron un paro de 48 horas en distintos planteles de educación media superior. Reclaman prestaciones adeudadas por aproximadamente 60 millones de pesos y la protesta dejó sin actividades a más de 20 mil estudiantes.

También aparecen señales de tensión en la UAM, donde el sindicato advierte sobre una posible sobrecarga derivada de la ampliación de la matrícula, y en Volkswagen Puebla, donde la representación de los trabajadores pidió no firmar bajas laborales ante despidos que asegura no fueron pactados en la reciente negociación contractual.

En salud, el Estado de México prepara una ampliación de IMSS-Bienestar mediante la incorporación de nueve inmuebles en Nezahualcóyotl, La Paz y Naucalpan. La medida puede aumentar la capacidad de atención en una zona altamente poblada, pero su efectividad dependerá de que los inmuebles se conviertan en unidades con personal, insumos, equipamiento y presupuesto suficientes.

El reto de la seguridad social es todavía más amplio. México mejoró su formalidad laboral durante las últimas dos décadas, pero el avance fue lento: la proporción de trabajadores formales pasó de 35 a 42%. Esto significa que una parte considerable de la fuerza laboral continúa sin acceso estable a prestaciones y sistemas contributivos como el IMSS.

El inicio de septiembre deja así una fotografía clara. La política ya se organiza para 2027, pero los problemas que pueden definir el ánimo social están ocurriendo ahora: empleo, salarios, prestaciones, salud y seguridad social. Los partidos pueden comenzar a disputar candidaturas; para millones de trabajadores, la verdadera evaluación continuará siendo mucho más sencilla: si las instituciones funcionan y si los derechos conquistados se cumplen.